

El Congreso tramitará una ley de igualdad retributiva

PLENO/ PSOE, Cs, PNV, ERC, PDeCAT, EH Bildu y Compromís apoyan la iniciativa de Podemos, y el PP se abstiene. La norma exige transparencia y prevé sanciones.

Mercedes Serraller. Madrid

El Congreso tramitará una Ley de Igualdad Retributiva que pretende acabar con la brecha salarial. PSOE, Ciudadanos, PNV, ERC, PDeCAT, EH Bildu y Compromís apoyaron ayer la iniciativa de Unidos Podemos, mientras el PP se desmarcó y se abstuvo. Durante el Pleno en la Cámara Baja, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, explicó que esta norma busca terminar con la opacidad de los criterios retributivos que, a su juicio, “facilitan a las empresas que la brecha salarial siga existiendo”.

El PSOE presentó el pasado lunes su propia iniciativa, que se ha mostrado proclive a fusionar con la de Podemos. Cs expresó ayer su temor a que las dos formaciones quieran “colgarse la medalla”.

El texto de Podemos recoge que las nóminas de los empleados incluyan información del promedio del salario distribuido por género. “La información de la brecha salarial de la empresa, en la nómina”, apuntó Montero, quien aseguró que las mujeres “somos campeonas” en desempleo, con un 18%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), mientras que la tasa para los hombres es cuatro puntos inferior.

Existe una “enorme brecha salarial real en España”, que se sitúa en torno al 22%-24%, “y no en torno al 14% como di-



La portavoz de Podemos, Irene Montero, ayer en el Congreso.

cen ustedes”, criticó Montero, quien lamentó que “muy pocos de ustedes (diputados del PP) se van a enterar del debate a la luz de lo vacía que está su bancada”.

Montero también dijo que la brecha salarial “genera beneficios” a la patronal, de 42.000 millones al año que no retribuye a las mujeres trabajadoras, y que un tercio de la riqueza del país es producida por las mujeres y no consta en las estadísticas oficiales.

El proyecto prevé que las empresas deban publicar las retribuciones de hombres y mujeres

Entre las medidas que incluye la proposición, Montero citó la obligación para las empresas de publicar las retribuciones de hombres y mujeres y que el convenio colectivo contenga los criterios

que justifican una determinada retribución atribuida en clasificación profesional y en el pago de cualquier complemento. También incluye sanciones para aquellas empresas que incumplan con la obligación de realizar una auditoría salarial o la necesidad de que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles.

Según apuntó, se presuponará discriminación cuando la brecha sea mayor al 20%. Del mismo modo, se propone la creación de una unidad especial para garantizar el cumplimiento de la norma que será competente para inspeccionar y sancionar.

La diputada del PP Celia Villalobos respondió que el texto, a pesar de ser “voluntarioso”, “carece de realidad” y no se trata de la “panacea” para terminar con la brecha salarial.

Según Villalobos, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se combate con más empleo y educación para ellas, temas que, a su juicio, sí han estado en la agenda política de los últimos años.

Villalobos definió a Montero como “experta en demagogia”, y le acusó de estar “rodeada de machistas”, para recordar algunos episodios entre el líder *morado*, Pablo Iglesias, y varias periodistas. “Ya está bien de dar lecciones sobre lo que ustedes carecen”, concluyó.



Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación y Cultura.

El PP plantea crear un suelo de gasto educativo con los niveles de 2009

Ignacio Bolea. Madrid

La subcomisión del Congreso que está negociando el próximo Pacto Educativo arrancó ayer el debate sobre la financiación del sistema con posiciones encontradas entre los diferentes partidos políticos. Mientras que el PP y Ciudadanos han planteado la necesidad de establecer un mínimo fijo de ingresos, el PSOE apuesta por vincular el gasto educativo al PIB.

La propuesta de los *populares* incluye la creación de un suelo de gastos para el sistema educativo, que se fijaría en cantidades similares a las que se destinaban en 2008 o 2009. En este último ejercicio, el total del gasto educativo ascendió a 53.092 millones de euros, lo que equivalía a un 5,07% del PIB. Sin embargo, los recortes provocados por la crisis hicieron que se redujera hasta los 46.624 millones de euros en 2015 –último año sobre el que hay datos en el Ministerio de Educación–, que equivalían a un 4,32% del PIB.

Debido a esta reducción, la diputada Sandra Moneo, del PP, aseguró que es necesaria “más inversión en educación” y defendió regresar a los niveles previos a la crisis. Asimismo, señaló que el establecimiento de este mínimo de ingresos tendría que estar acompañado de otras medidas, que deben ser cuantificadas, con las que se tienen que comprometer tanto el Gobierno como las comunidades autónomas.

La representante del PSOE, Luz Martínez Seijo, denunció que todavía no hay un compromiso serio por parte del Gobierno y que en el último plan presupuestario enviado a Bruselas el gasto educativo se reducía al 3,8% del PIB. La representante socialista también protestó porque PP y

El PSOE pide elevar la financiación en 1.500 millones cada año, hasta alcanzar el 5% del PIB

Ciudadanos hubieran llevado a la subcomisión temas que no se iban a introducir en la negociación, como el MIR educativo, el modelo lingüístico de Cataluña o las competencias de la alta inspección educativa.

La propuesta financiera de los socialistas consiste en aumentar el gasto educativo en 1.500 millones de euros cada año, hasta que se establezca en un 5% del PIB. Entre las prioridades a las que se destinaría este dinero, Martínez citó la contratación de más profesores, dinero para becas, la universalización de la educación de 0 a 3 años, la ampliación de la oferta de formación profesional o la creación de nuevas infraestructuras educativas.

Sin embargo, esta propuesta fue criticada tanto por el PP como por Ciudadanos, ya que abre la puerta a que la cantidad destinada se pueda reducir en caso de que también se contraiga el PIB nacional.

El método defendido por Marta Martín, diputada de Ciudadanos, es que el gasto se determine a partir de indicadores relacionados con el coste escolar. Usó como referencia el coste por puesto escolar que plantea la OCDE, según el cual el gasto por alumno en España se tendría que situar en unos 6.000 euros por alumno.

Entre los acuerdos que ya se han alcanzado, destaca la creación de un fondo de cohesión interterritorial para paliar las diferencias entre comunidades autónomas.

Valencia exige “solucionar” la deuda histórica para votar una nueva financiación

J.Brines. Valencia

La administración valenciana está dispuesta a enrocarse en la deuda histórica para votar a favor de un nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reiteró ayer la necesidad de compensar la financiación a la región en el nuevo modelo. Soler intervino en un encuentro del Forum Europa. “No aceptaremos ningún sistema de financiación que no ofrezca una solución a la deuda acumulada”, dijo.

Soler explicó que la deuda es “una espada de Damocles” que se lleva cada año el 25% del presupuesto, es decir, que cuesta más de cinco mil millones anuales.

Llegó a calificar de “inmoral” el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El conseller apuntó que para la distribución de los fondos, “el entorno debe ser objetivo, no arbitrario”, y que se debe articular un sistema que aporte a las comunidades autónomas la financiación necesaria para atender sus com-

petencias. “Si se ponen encima de la mesa los 16.000 millones de euros de diferencia entre las necesidades y lo que se recibe, la negociación va a ser muy diferente”.

Aportación extraordinaria

El valenciano se refirió también a la situación política de Cataluña y afirmó que “es la excusa para no hacer nada”. Añadió que “el problema de Cataluña no se resuelve con un buen sistema de financiación autonómica, pero seguro que daño no le hace”.

Soler ha pedido varias me-

didias al Gobierno para tomar ya, antes de que se termine de forjar el nuevo sistema de financiación. Entre ellas, reclama una aportación extraordinaria a las arcas valencianas para hacer frente a la falta de fondos. Aunque eludió dar una cifra concreta, dijo que no sería en ningún caso inferior a los 1.325 millones de euros que la Generalitat ha consignado en los presupuestos de los tres últimos años, que se ha dado en llamar la partida reivindicativa, y que finalmente se acaba cubriendo con el FLA.